



Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de
Salud y Políticas Sociales

Ref: SG/995/2024
Ref Abc: 860-2024/42792

En relación con su solicitud de informe, con fecha de entrada en esta Dirección General el día 3 de octubre de 2024, sobre el anteproyecto de ley de derechos y garantías de las personas con necesidades paliativas, esta Dirección General, informa, desde el punto de vista jurídico, lo siguiente:

I.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ANTEPROYECTO.

a) Competencia de la Comunidad Autónoma.

La competencia de la Comunidad Autónoma constituye el primer y esencial presupuesto para la validez de cualquier clase de disposición, tanto legal como reglamentaria, que pretendan dictar sus órganos.

La Comunidad Autónoma de La Rioja ostenta competencia para la tramitación del anteproyecto de ley informado en aplicación del artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, en cuya virtud, *corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución las siguientes materias, 3, las bases y coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, 4. La coordinación hospitalaria en general y 5. Sanidad e higiene*

En definitiva, con base, en este título competencial, podemos justificar la competencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja para iniciar la tramitación de un anteproyecto de ley como el que se informa.

b) Objeto de la norma.

La norma proyectada tiene por objeto el derecho de las personas a acceder a unos cuidados paliativos.

El borrador de disposición está compuesto por una parte expositiva y veintinueve artículos, una disposición adicional, una derogatoria y dos disposiciones finales.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2024/042792	Informe	Solicitudes y remisiones generales		2024/0897353
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Director General			
2				

c) Cumplimiento de trámites.

La disposición proyectada debe ajustar su procedimiento de elaboración a lo establecido en los artículos 32 bis y siguientes de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En cumplimiento de esta normativa se han seguido los siguientes trámites:

1.- Según el informe de Secretaría General Técnica de la Consejería de 2 de octubre de 2024, el procedimiento se inicia por medio de una consulta previa. Ésta se practicó entre los días 28 de febrero al 19 de marzo de 2024, ambos inclusive, habiendo recibido aportaciones de la Asociación FARO; sin embargo, este trámite no está documentado en el expediente remitido.

2.- Mediante resolución de 9 de abril de 2024, se inicia la tramitación del expediente por la Sra. Consejera. La memoria del órgano gestor, es de fecha 16 de mayo de 2024, está suscrita por el Director General de Prestaciones y Farmacia y se le acompaña un anteproyecto de ley.

3.- Según el certificado de 26 de junio de 2024, del Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, el trámite de información pública se practicó entre los días 27 de mayo a 18 de junio con el resultado que obra en las actuaciones.

4.- La diligencia de formación del expediente de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Políticas Sociales es de fecha 22 de mayo de 2024.

5.- Según el certificado de 17 de septiembre de 2024, el Consejo Riojano de Salud en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2024, ha sido informado sobre el Anteproyecto de Ley de derechos y garantías de las personas con necesidades paliativas

6.- Como resulta del expediente, el dictamen, del Consejo Consultivo de La Rioja tendría carácter facultativo.

Como prevé el artículo 39 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, concluidas las actuaciones de la Secretaría General Técnica encargada de la tramitación elaborará una memoria sucinta de todo el procedimiento, en la que se reseñarán los antecedentes, los trámites practicados y su resultado, las modificaciones introducidas en el texto del anteproyecto como consecuencia del contenido de los documentos e informes resultantes de los trámites de consulta previa, audiencia e informes preceptivos, así como una exposición motivada de aquellas que hayan sido rechazadas. La memoria deberá recoger expresamente una declaración motivada de la adecuación al ordenamiento jurídico del texto del anteproyecto.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 2 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2024/042792	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2024/0897353
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Director General			
2			

II.- CONSIDERACIONES SOBRE EL TEXTO DEL ANTEPROYECTO.

Examinado el concreto articulado del anteproyecto de ley, esta Dirección General informa lo siguiente:

1.- En la exposición de motivos podemos leer que *El Estatuto de Autonomía de la Rioja, atribuye a la Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia para el desarrollo legislativo y de ejecución en materia de sanidad e higiene; se recomienda incluir la referencia al artículo 9.5º del Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio,*

2.- El artículo 4 define cuidados paliativos, permitiéndolos en el domicilio, hospital o lugar de residencia. Se recomienda sustituir la referencia *lugar de residencia* por otro como centro social en el que resida o centro de residencia, para evitar que llegue a confundirse con el término civil y fiscal de lugar de residencia.

En el punto 2 de este precepto deberá corregirse el error tipográfico y donde dice *2. Enfermedad incurable avanzada: enfermedad de curso gradual y progresivo sin posibilidades de respuesta al tratamiento específico que produce una pérdida de autonomía progresiva que puede conllevar sufrimiento el paciente, familia y entorno,* parece que debería decir *2. Enfermedad incurable avanzada: enfermedad de curso gradual y progresivo sin posibilidades de respuesta al tratamiento específico que produce una pérdida de autonomía progresiva que puede conllevar sufrimiento del paciente, familia y entorno.*

En el punto 6 de este artículo se define el consentimiento informado; sin embargo, esta acepción ya viene definida en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que tiene condición de básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.1ª y 16ª de la Constitución; no se considera necesario incluir esta definición que ya tiene cabida en otra norma estatal que, por otro lado el anteproyecto de ley autonómica, se limita, simplemente, a reproducir con las consecuencias de *lege repetitae* que más adelante veremos.

El punto 7, en cuanto se refiere a instrucciones previas, no contiene tanto una definición como una delimitación subjetiva de las personas que podrán prestar este documento; lo hace en línea con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre; este apartado solo incluye como novedad una referencia *a las personas que no tenga medidas judiciales de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica que se lo impidan*.

Sin embargo, esta limitación se incluye en el artículo 14 del anteproyecto informado, por ello, se somete a consideración del órgano gestor suprimir este apartado 7, puesto que su contenido reproduce en parte el artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente y, en lo que innova, reitera lo dispuesto en

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 3 / 10
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2024/042792	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2024/0897353
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Director General			
2			

el artículo 14 proyectado, más adecuado que este apartado, para regular la referencia a la capacidad que introduce ex novo.

3.- El artículo 9.1 proyectado reconoce el derecho a toda persona enferma a que se preserve su intimidad personal y familiar y a la protección de todos los datos relacionados con su atención sanitaria.

Sin embargo, este derecho, y otros que refiere la norma proyectada, están ya incluidos en la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja, también la norma proyectada los invoca como principios inherentes al sistema en el artículo 3, por ello, resulta reiterativo y se recomienda su supresión en aras a garantizar la claridad de la norma.

Por otro lado, en lo que afecta al apartado segundo, se sugiere al centro gestor sustituir la referencia a *centro de carácter social* por el de *centro de carácter asistencial*.

4.- El artículo 10 incluye el derecho a la información clínica, sin embargo, éste ya está suficientemente definido en el artículo 4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y en el artículo 11 de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja; no parece, por ende, necesaria su reiteración.

En lo que afecta al párrafo segundo, podemos leer que, *...se respetará esta decisión haciéndoles ver la trascendencia de la misma y la posibilidad de designar a quién le represente, designación que se hará verbalmente a efectos y la posibilidad de designar a quién le represente, designación que se hará verbalmente a efectos de dejar constancia en la historia clínica de tal designación y que acepte recibir la mencionada información.*

Se recomienda que, siendo posible, la designación de representante, si no existe ya por ejemplo, en el documento de instrucciones previas, se haga por escrito.

Por otro lado, cabe poner de manifiesto una redacción similar a ésta se contiene en el artículo 17.2 proyectado, por ello, se recomienda suprimir uno de los dos apartados para evitar reiteraciones innecesarias.

5.- El artículo 11 prevé que, *En general, el consentimiento se dará verbalmente*; este precepto entra en contradicción con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, cuyo carácter básico ya hemos puesto de manifiesto y que señala:

2. El consentimiento será verbal por regla general.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 4 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2024/042792	Informe	Solicitudes y remisiones generales		2024/0897353
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Director General			
2				

Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud.

5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.

En términos similares el artículo 6 de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja sobre derechos relacionados con la autonomía de la voluntad, que precisa:

1. Consentimiento informado. (...)b) El consentimiento, cumplido el deber de información requerido en el apartado anterior, no estará sometido a forma. No obstante lo anterior, en los supuestos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos o prácticas médicas que impliquen riesgos o inconvenientes notorios y previsibles para la salud del usuario, el consentimiento deberá formalizarse por escrito en la forma que reglamentariamente se determine.

Lo expuesto recomienda adaptar el artículo proyectado a la legislación básica reproducida en la autonómica.

6.- El artículo 12 es una práctica reproducción del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica que, recordamos, tiene el carácter de legislación básica.

Ello obliga a poner este precepto en relación con la doctrina de las *leges repetitae*, o reproducción de normas dictadas por otras administraciones, normalmente, la estatal.

Esta práctica puede implicar vulneración de competencia cuando opera por una administración que carece de competencia para dictarlas por sí mismo, aunque se limite a parafrasear o reproducir literalmente lo establecido en aquellas.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 5 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2024/042792	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2024/0897353
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Director General			
2			

Se considera oportuna la cita a la Sentencia del Tribunal Constitucional 51/2019 de 11 abril (RTC 2019\51) que reproduce en parte la STC 341/2005 (RTC 2005, 341) , FJ 9, cuando recuerda que cabe distinguir dos supuestos de reproducción de normas estatales por las autonómicas, de los que se derivan consecuencias distintas:

El primer supuesto se produce cuando la norma reproducida y la que reproduce se encuadran en una materia sobre la que ostentan competencias tanto el Estado como la comunidad autónoma. El segundo tiene lugar cuando la reproducción se concreta en normas relativas a materias en las que la comunidad autónoma carece de competencias. Pues bien, de acuerdo con la doctrina antes expuesta, mientras que en el segundo la falta de habilitación autonómica debe conducirnos a declarar la inconstitucionalidad de la norma que transcribe la norma estatal (salvo supuestos excepcionales como el aludido en la STC 47/2004, de 25 de marzo), en el primero, al margen de reproches de técnica legislativa, la consecuencia no será siempre la inconstitucionalidad, sino que habrá que estar a los efectos que tal reproducción pueda producir en el caso concreto".

Con este punto de partida, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del año 2019 establece una pauta de actuación:

Para hacer esa valoración, y sistematizando la jurisprudencia recaída en la materia, podemos afirmar hoy que en los casos de alegación de la doctrina de las leyes repetitae, es preciso, en primer lugar y al igual que ocurre en general en los supuestos de inconstitucionalidad mediata, confirmar que la normativa que se pretende reproducida ha sido efectivamente dictada en ejercicio de una competencia estatal, ya sea exclusiva —lo que dará lugar a un canon más estricto de enjuiciamiento de la regulación autonómica reiterativa—, ya sea compartida con las comunidades autónomas, pero correspondiente al Estado.

Realizada esa comprobación, será necesario verificar que la reiteración de la normativa estatal por el legislador autonómico satisface dos condiciones necesarias para ser admisible desde el punto de vista constitucional. Por un lado, debe concurrir un elemento finalista que justifique la necesidad de esa reproducción, que solo podrá tener un sentido instrumental: hacer más comprensible el desarrollo normativo que realiza la comunidad autónoma en ejercicio de sus competencias propias. Como afirma la STC 47/2004, FJ 8, recogida en otras posteriores como la STC 341/2005, FJ 9, o la 201/2013, de 5 de diciembre (RTC 2013, 201) , FJ 11, la reiteración se debe aprobar "con la sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento autonómico". De esta forma, como señalamos en la STC 73/2016, FJ 10, "la legislación autonómica puede introducirse en el terreno de lo básico, pero solo por excepción, cuando se limite a repetir las bases y únicamente si de ese modo contribuye a hacer inteligible el régimen autonómico de desarrollo". No sería por ello aceptable que la

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 6 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2024/042792	Informe	Solicitudes y remisiones generales		2024/0897353
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Director General			
2				

reproducción de las bases estatales pretendiese simplemente refundir en un único texto normativo toda la regulación aplicable en una materia (bases y desarrollo), aunque fuese con la intención de facilitar su uso al aplicador del derecho, porque daría la impresión equivocada de que el legislador autonómico ha asumido la competencia sobre la totalidad de una regulación, como si fuese autor de un sistema normativo completo, cuando en realidad está engarzado en el marco más amplio del ordenamiento del Estado, al que complementa. De hecho, en los casos en los que esa recepción instrumental de la normativa estatal sea posible, no por ello podrá entenderse que las prescripciones insertadas pasen a ser legislación autonómica dictada en ejercicio de una competencia propia —eso sería una apropiación competencial inadmisibile—, sino prescripciones básicas estatales presentes en esa legislación, de manera que su reforma o supresión estará subordinada a la modificación o derogación de la correspondiente normativa básica por el Estado. Se trata, por tanto, de normativa vinculada a las bases que reproducen, que si bien no queda formalmente alterada cuando aquellas se modifican, sí lo son materialmente, e incurrirán en inconstitucionalidad sobrevenida si no se acomodan por el legislador autonómico al nuevo contenido de las bases tras su reforma.

Por otro lado, será también necesario, como condición material, que la reproducción de la normativa básica sea fiel y no incurra en alteraciones más o menos subrepticias de la misma, efecto que puede producirse bien por recogerla solo de modo parcial (caso de las SSTC 154/1989, de 5 de octubre (RTC 1989, 154) , FJ 6; 62/1993, FJ 4, que al detectar una "reproducción parcial, con omisiones muy significativas", apreció una contradicción por defecto, y no por exceso, con la norma básica del Estado respecto a las causas de incompatibilidad de determinados cargos de las cajas de ahorro; 18/2011, FJ 18, o 62/2017, de 25 de mayo (RTC 2017, 62) , FJ 7), bien por parafrasear la regulación estatal en términos que introduzcan confusión (como ocurrió en el primero de los preceptos examinados en el fundamento jurídico 7 de la citada STC 62/2017). En particular, hemos advertido que "omitir [una condición básica] puede ser en ocasiones tanto como contradecir" (STC 172/1996, FJ 2), sobre todo "cuando a resultas de una omisión, sea parcial o completa, la norma autonómica contenga en sí misma y por consecuencia una regulación contraria a la ley básica estatal" (STC 73/1997, FJ 4). En definitiva, el legislador autonómico no puede, con ocasión de su desarrollo, reformular las bases estatales, pretendiendo incidir en su eficacia en su territorio [SSTC 73/2016, FJ 9, y 8/2018, FJ 3 f)], sino que su recepción de la misma ha de ser, además de instrumental o auxiliar, fidedigna.

(...)

De acuerdo con la doctrina de las leges repetitae que venimos aplicando en esta sentencia, entendemos que la reproducción de esos contenidos estatales básicos que, en general, como técnica normativa debe ser evitada por los peligros que comporta, puede tener sentido cuando respetándose los términos de la

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 7 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2024/042792	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2024/0897353
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Director General			
2			

normativa básica se hace una utilización de aquella para hacer comprensible la normativa de desarrollo, sin ánimo de generar un texto refundido de bases estatales y desarrollo autonómico que no está previsto en nuestro sistema constitucional de reparto de competencias porque supone en la práctica una usurpación del espacio normativo que corresponde al Estado en una suerte de conmixión de competencias.

(Los subrayados son nuestros).

Por lo expuesto, se somete a consideración del órgano gestor la necesidad de conservar este precepto, pues la reproducción solo tendría sentido si viene a hacer inteligible la norma proyectada, lo que parece cuestionable, pues el consentimiento por representación también está regulado por la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja.

No obstante, si se considera oportuno conservar el precepto, se aconseja redactar el precepto con una frase introductoria: *El consentimiento por representación procederá: u otra similar.*

7.- Se recomienda modificar la estructura del artículo 13, así, iniciarlo con una frase introductoria en su apartado primero y crear dos apartados independientes, pues la redacción actual presenta una estructura distinta a su significado.

Se sugiere la siguiente redacción

Artículo 13: Derecho al rechazo y a la retirada de una intervención.

1. Los pacientes tendrán los siguientes derechos
 - a) A rechazar las intervenciones propuestas, tras un proceso de información y decisión, a pesar de que esto pueda suponer un riesgo para su vida.
 - b) A solicitar la interrupción de los tratamientos una vez instaurados.
 - c) A recibir información de los efectos y posibles riesgos como de las consecuencias de su no aceptación, de modo adecuado, comprensible y accesible.
2. El rechazo o la retirada de una intervención constituye un derecho que debe ser respetado a pesar de no coincidir con el criterio clínico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 8 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2024/042792	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2024/0897353	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Director General				
2				

3. *La negativa a recibir una intervención o tratamiento, o la decisión de interrumpirlo, no supondrá menoscabo alguno en el resto de atención sanitaria que se le dispense, especialmente en lo referido a la destinada a paliar el sufrimiento.*

8.- El artículo 14 proyectado, tampoco innova el ordenamiento jurídico como es propio de una regulación normativa.

La posibilidad de redactar voluntades anticipadas, su inscripción en el registro estatal y su constancia en la historia clínica, ya están previstas en la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y en el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal.

9.- El deber de confidencialidad del personal sanitario proyectado en el artículo 18 ya está impuesto en el artículo 19.j) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud que tiene carácter básico.

10.- El artículo 22.1 prevé *las instituciones públicas deberán garantizar la igualdad de oportunidades para recibir cuidados paliativos con independencia del lugar de residencia del paciente.*

Se recomienda sustituir la expresión “*con independencia del lugar de residencia del paciente*” por “*en el ámbito territorial de La Rioja*”, así quedan incluidos, si es lo que pretende el precepto, todos los centros sanitarios y sociales, así como las prestaciones domiciliarias que pueda precisar el paciente.

11.- Se recomienda especificar sanciones correspondientes a las infracciones que pretende tipificar la norma proyectada, en aras a satisfacer, con plenitud el principio de legalidad, la remisión normativa que hace el artículo 28 proyectado, es insuficiente, pues deja infracciones sin precisar la sanción, en concreto las graves y muy graves del artículo 26 y 27 proyectados.

III.- CONCLUSIONES.

1. – La Comunidad Autónoma ostenta competencias para regular la materia tramitada en este anteproyecto de Ley. El rango de la norma también es el adecuado.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 9 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2024/042792	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2024/0897353	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Director General				
2				

2.- En lo afecta al procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley, es conforme con lo dispuesto en los artículos 32.bis y siguientes de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

3.- En cuanto al concreto articulado del anteproyecto, podrán tomarse en consideración las manifestaciones vertidas en el apartado II.- de este informe.

Es cuanto ha de informarse al respecto, sin perjuicio de mejor criterio en derecho. No obstante, V.I. resolverá.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 10 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2024/042792	Informe	Solicitudes y remisiones generales		2024/0897353
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Director General			
2				